EXPEDIENTE: SUP-JIN-562/2025 Y
ACUMUALDOS

MAGISTRADO PONENTE: FELIPE DE LA
MATA PIZAÑA¹

Ciudad de México, ++++ de julio de dos mil veinticinco.

Sentencia que, con motivo de las demandas presentadas por **Fernando Delgadillo González** y otros² determina: **a) acumular** las demandas presentadas por la parte actora; **b) revocar** en lo que fue materia de impugnación el acuerdo INE/CG572/2025 emitido por el Consejo General del Instituto Nacional Electoral; **c) revocar** el acuerdo que declaró vacante el cargo³; y **b) vincula** a la autoridad administrativa a entregar la constancia de mayoría correspondiente.

ÍNDICE

GLOSARIO.....	1
I. ANTECEDENTES	2
II. COMPETENCIA	3
III. ACUMULACIÓN.....	4
IV. PROCEDENCIA.....	4
V. EFECTOS.....	18
VI. RESUELVE.....	19

GLOSARIO

CE:	Comité de Evaluación del Poder Ejecutivo Federal.
CG del INE/responsable:	Consejo General del Instituto Nacional Electoral.
Constitución:	Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos
DOF:	Diario Oficial de la Federación.
INE:	Instituto Nacional Electoral.
Ley de Medios:	Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral.
Ley Orgánica:	Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación.
Parte actora:	Fernando Delgadillo González, Carlos Francisco López Reyna, Karina Isela Díaz Guzmán, candidatos y candidata a magistratura en materia del trabajo, del Tercer Circuito, en el distrito judicial electoral 01, con sede en Jalisco; Yuridia Arias Alvarez, candidata a magistrada del trabajo en el referido circuito. Distrito Judicial 4; y Omar Vázquez

¹ **Secretariado:** Fernando Ramírez Barrios, Erica Amézquita Delgado, José Alberto Montes de Oca Sánchez, Nayelli Oviedo Gonzaga y Ayrton Rodrigo Cortés Gómez.

² Carlos Francisco López Reyna, Yuridia Arias Alvarez y Omar Vázquez Pérez.

³ INE/CG571/2025

PEE: Pérez, candidato a magistrado en materia del trabajo, en el referido circuito, Distrito Judicial 3.
Proceso Electoral Extraordinario 2024-2025 para la elección de diversos cargos de personas juzgadoras.

Sala Superior: Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación.

Tribunal Electoral: Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación.

I. ANTECEDENTES

1. Reforma judicial. El quince de septiembre de dos mil veinticuatro, se publicó en el DOF el Decreto por el que se reforman, adicionan, y derogan diversas disposiciones de la Constitución, en materia de reforma del Poder Judicial.

2. Declaratoria de inicio del PEE⁴. El veintitrés de septiembre de dos mil veinticuatro, el CG del INE aprobó el acuerdo por el que declaró el inicio del PEE, en el que se elegirían, entre otros cargos, a las magistraturas en materia del trabajo del Tercer Circuito, con sede en Jalisco.

3. Jornada electoral. El uno de junio de dos mil veinticinco⁵, se llevó a cabo la jornada electoral del PEE⁶, en la cual, por lo que hace a la elección del distrito judicial 01, Carlos Francisco López Reyna obtuvo la mayoría de los votos, respecto de los hombres, como se muestra en la siguiente tabla:

No.	Nombre	Poder que los postuló	Votos
1.	López Reyna Carlos Francisco	PE	34,775
2.	Delgadillo González Fernando	PL	21,766
3.	Gaitán Estrada Carlos	PE-PJ	15,309
4.	Parada Villarreal Edgar Alan	PJ	12,708

5. Cómputo Nacional y declaración de validez. El veintiséis de junio, el CG del INE: **a)** emitió la sumatoria nacional de la elección referida y realizó la asignación a las personas que obtuvieron el mayor número de votos, en forma paritaria⁷; y **b)** declaró la validez de esa elección y

⁴ INE/CG2240/2024, publicado en el DOF el veintisiete de septiembre de dos mil veinticuatro.

⁵ En adelante las fechas corresponden a dos mil veinticinco, salvo mención diversa.

⁶ En adelante, las fechas corresponderán a dos mil veinticinco, salvo precisión.

⁷ En el acuerdo INE/CG571/2025.

entregó las constancias de mayoría a las candidaturas que resultaron ganadoras⁸.

Asimismo, ese día declaró vacante el lugar que le correspondía a Carlos Francisco López Reyna porque no cumplió el requisito de contar con promedio mínimo de 9 puntos en las materias afines a la especialidad.

6. Juicios de inconformidad. Los días uno, cuatro y cinco de julio, la parte actora presentó sendas demandas de juicio de inconformidad, a fin de impugnar los actos anteriores.

7. Turno. En su momento, la presidencia de este órgano jurisdiccional acordó integrar los expedientes que a continuación se detallan y turnarlos a la ponencia del magistrado Felipe de la Mata Pizaña.

Expediente	Parte actora
SUP-JIN-562/2025	Fernando Delgadillo González
SUP-JIN-571/2025	Carlos Francisco López Reyna
SUP-JIN-715/2025	Yuridia Arias Alvarez
SUP-JIN-796/2025	Omar Vázquez Pérez
SUP-JIN-938/2025	Karina Isela Díaz Guzmán

8. Instrucción. En su oportunidad, el magistrado instructor radicó y admitió las demandas y, al no haber diligencias pendientes por desahogar declaró cerrada la instrucción.

II. COMPETENCIA

Esta Sala Superior es competente para conocer los presentes medios de impugnación, toda vez que diversas candidaturas controvierten actos relacionados con la elección de magistraturas de Circuito, en el marco del PEE para renovar diversos cargos del Poder Judicial de la Federación⁹.

⁸ En el acuerdo INE/CG572/2025

⁹ Conforme a lo previsto en el artículo 99, párrafo cuarto, fracción I, de la Constitución general, en relación con lo previsto en los artículos 256, fracción I, inciso a) de la Ley Orgánica, así como los artículos 50, numeral 1, inciso f) y 53, numeral 1, inciso c), ambos de la Ley de Medios.

III. ACUMULACIÓN.

Procede acumular los juicios de inconformidad, porque existe conexidad en la causa, al tratarse de la misma autoridad responsable y controvertir los mismos actos¹⁰.

En consecuencia, los expedientes SUP-JIN-571/2025, SUP-JIN-715/2025, SUP-JIN-796/2025 y SUP-JIN-938/2025, se deben acumular al diverso SUP-JIN-562/2025, por ser el primero que se registró en esta Sala Superior. Por tanto, se deberá agregar una copia certificada de los puntos resolutivos a los expedientes acumulados.

IV. PROCEDENCIA

Los medios de impugnación cumplen los requisitos de procedencia¹¹.

1. Forma. Las demandas se presentaron por escrito, y en estas consta: **a)** el nombre y la firma de la parte actora; **b)** el domicilio para oír y recibir notificaciones, así como las personas autorizadas para tal efecto; **c)** los actos impugnados; **d)** los hechos base de la impugnación, así como **e)** los agravios y la normativa presuntamente vulnerada.

2. Oportunidad. Se considera que los juicios fueron promovidos de manera oportuna, porque los acuerdos impugnados, si bien fueron aprobados por el CG del INE el veintiséis de junio, lo cierto es que al ser materia de engrose, fueron publicados en la Gaceta del INE hasta el uno de julio.

En ese sentido, si el acuerdo impugnado fue publicado el uno de julio, y las demandas fueron presentadas por los accionantes el uno¹², cuatro¹³

¹⁰ De conformidad con el artículo 79, párrafo 1, del Reglamento Interno del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación.

¹¹ De conformidad con los artículos 7, párrafo primero; 8, párrafo primero; 9, párrafo primero y 55, numeral 1, inciso c), de la Ley de Medios.

¹² Carlos Francisco López Reyna.

¹³ Fernando Delgadillo González, Yuridia Arias Alvarez y Omar Vázquez Pérez.

y cinco de julio¹⁴, es evidente su oportunidad, porque el plazo venció el cinco del mismo mes.

3. Legitimación y personería. La parte actora tiene legitimación porque comparece por su propio derecho y por haber contenido como candidaturas en la elección que se controvierte.

4. Interés jurídico. La parte actora tiene interés jurídico porque controvierten dos acuerdos del CG del INE relacionados con la elección en la cual participaron.

5. Definitividad. Se colma, porque no hay otro medio de impugnación que deba agotarse antes de acudir a esta instancia.

II. Requisitos especiales¹⁵. Los requisitos especiales de procedibilidad también se cumplen, toda vez que parte actora controvierte la elección de magistraturas de circuito en materia trabajo del Tercer Circuito, con sede en Jalisco.

III. ESTUDIO DE FONDO

A. Contexto

En uno de los acuerdos impugnados¹⁶, el CG del INE determinó, entre otras cuestiones que conforme al acuerdo INE/CG392/2025, la revisión de requisitos de elegibilidad debía realizarse previo a la entrega de las constancias de mayoría y declaración de validez.

Para realizar lo anterior, señaló que, **al no existir una metodología previa para obtener el promedio de nueve puntos, era necesario establecer criterios** que permitieran verificar que la persona candidata

¹⁴ Karina Isla Díaz Guzmán

¹⁵ Artículo 52, párrafo 1, incisos a), b), c), d) y e), de la LGSMIME.

¹⁶ INE/CG571/2025

contaba con dichos requisitos en las asignaturas afines a la especialidad jurídica elegida por las candidaturas¹⁷.

Así, en cuanto a **Carlos Francisco López Reyna**¹⁸, se advierte que la responsable determinó que no cumplía con el promedio de nueve puntos en la especialidad correspondiente. Esto al tomar en consideración las materias de: **a)** derecho del trabajo I (calificación-8); **b)** derecho del trabajo II (calificación-9.5); y, **c)** derecho procesal del trabajo (calificación-8); de lo cual obtuvo un promedio de 8.50¹⁹.

B. Agravios.

a) Carlos Francisco López Reyna, señala que el CG del INE:

1. Carece de competencia para revisar requisitos de elegibilidad, pues a quienes les corresponde revisar dichos requisitos es a los Comités de Evaluación.
2. Vulneró el principio de certeza y seguridad jurídica porque aprobó los parámetros de evaluación después de obtener el registro.
3. Implementó una metodología en la que desconoce el área de conocimiento general de un Tribunal Colegiado de Circuito en materia laboral; además de que aplicó dicha metodología sin atender a sus propios parámetros.
4. Revocó sus propios actos.

b) Fernando Delgadillo González²⁰ argumenta que el CG del INE:

1. No debió de haber declarado vacante el lugar del candidato inelegible, sino que se la debió asignar a él, al haber obtenido el segundo hombre con el mayor número de votos en el distrito judicial 01.

c. Yuridia Arias Alvarez²¹ refiere que el CG del INE:

1. Ha sido omiso en asignarle la vacante al tener derecho a ella, pues es la mujer que obtuvo el mayor número de votos en el distrito judicial 04.
2. Vulneró el principio de paridad.

d) Omar Vázquez Pérez²² manifiesta que:

¹⁷ Véase el anexo de la sentencia.

¹⁸ Actor en el juicio de inconformidad SUP-JIN-571/2025.

¹⁹ Véase la en la "Fe de Erratas Anexo 2 MC, titulada "HOJAS DE REVISIÓN DE LAS PERSONAS CANDIDATAS A MAGISTRATURAS DE CIRCUITO", páginas 274 a 275.

²⁰ Actor en el juicio de inconformidad SUP-JIN-562/2025.

²¹ Actora en el juicio de inconformidad SUP-JIN-715/2025.

²² Actor en el juicio de inconformidad SUP-JIN-796/2025.

1. El CG del INE no tenía facultades para dejar vacantes 7 plazas, por lo que se le debió designar a él al ser el hombre más votado en el distrito judicial 03.
2. Los Comités de Evaluación ya se habían pronunciado sobre el requisito de nueve de promedio. Además de que dicho promedio no es un elemento objetivo y razonable para determinar la elegibilidad e idoneidad de los aspirantes.
3. Las contiendas fueron inequitativas.

e) Karina Isela Díaz Guzmán²³ señala que:

1. Tiene derecho a que se le asigne la vacante, al ser la segunda mujer más votada en el distrito 01, de la elección por la que participó.
2. Se deben inaplicar los criterios de paridad implementados por el CG del INE; así como el criterio de alternancia previsto en el artículo 96 Constitucional, a fin de que se le designe la vacante de un hombre a una mujer.
3. Se debe de aplicar la paridad flexible, a fin de que una mujer (que es ella) ocupe la plaza que dejó vacante un hombre.

C. Metodología

Por cuestión de método, en primer lugar, se estudiará lo relacionado con la falta de competencia del CG del INE para analizar los requisitos de elegibilidad a partir de la metodología implementada, pues de resultar fundado traería como consecuencia la revocación total de los acuerdos controvertidos.

Posteriormente, se analizarán el resto de los conceptos de agravio de la parte actora, sin que ello les irroque perjuicio²⁴.

D. Decisión.

Se deben **revocar** los acuerdos impugnados en lo que fue materia de impugnación, porque es criterio de esta Sala Superior que la valoración de las materias correspondientes a la especialidad es una cuestión técnica que corresponde a los Comités de Evaluación, quienes en su oportunidad valoraron el cumplimiento de ese requisito, de conformidad con la metodología que establecieron en la convocatoria respectiva, sin

²³ Actora en el juicio de inconformidad SUP-JUIN-938/2025.

²⁴ Jurisprudencia 4/2000 de rubro: **AGRAVIOS, SU EXAMEN EN CONJUNTO O SEPARADO, NO CAUSA LESIÓN.**

que se justifique que en este momento el INE lleve a cabo una nueva revisión.

En consecuencia, se **revoca** el acuerdo por el cual la autoridad administrativa declaró vacante el cargo por el que se postuló **Carlos Francisco López Reyna** y, en ese sentido, se **vincula** al CG del INE a entregarle la constancia de mayoría correspondiente.

E. Análisis de la controversia.

Marco normativo

1. Revisión del requisito de elegibilidad de personas juzgadoras.

La Constitución establece que las personas juzgadoras integrantes del Poder Judicial de la Federación serán elegidas de manera libre, directa y secreta por el voto de la ciudadanía²⁵.

Para ser electo magistrada o magistrado de Circuito, así como jueza o juez de Distrito, se necesita haber obtenido un promedio general de calificación en la licenciatura en derecho de cuando menos ocho puntos o su equivalente, y de nueve puntos o su equivalente en las materias relacionadas con el cargo al que se postula, en la licenciatura, especialidad, maestría o doctorado.

La postulación de las candidaturas le corresponde a los Poderes de la Unión, quienes son los encargados de establecer mecanismos públicos, abiertos, transparentes, inclusivos y accesibles que acrediten los requisitos establecidos en la Constitución y en las leyes²⁶.

El cumplimiento de tales requisitos será evaluado por los Comités de Evaluación que integren los Poderes de la Unión, mismos que estarán conformados por cinco personas reconocidas en la actividad jurídica y cuya función será identificar a las personas que cuenten con los

²⁵ Artículo 96, párrafo primero.

²⁶ Artículo 96, párrafo primero, fracción II.

elementos técnicos necesarios para el desempeño del cargo, y se hayan distinguido por su honestidad, buena fama pública, competencia y antecedentes académicos y profesionales en el ejercicio de la actividad jurídica²⁷.

Por otra parte, en lo que interesa al caso, en términos de la Ley Electoral²⁸, se establecen los siguientes lineamientos:

- ✓ Cada Poder de la Unión instalará un Comité de Evaluación a través de los mecanismos que determinen dentro de los quince días naturales posteriores a la publicación de la convocatoria general que emita el Senado de la República.
- ✓ Los Comités publicarán dentro de los quince días naturales posteriores a su integración las convocatorias para participar en el proceso de evaluación y selección de postulaciones, que contendrán lo siguiente:
 - La información pertinente contenida en la convocatoria general que publique el Senado de la República.
 - Las etapas, fechas y plazos aplicables al proceso de inscripción, evaluación y selección de postulaciones por el Comité.
 - Los mecanismos, formatos y otros medios de contacto para inscribirse en la convocatoria, así como para el seguimiento del proceso.
 - **La metodología de evaluación de idoneidad** de las personas aspirantes para el desempeño de los cargos de elección que correspondan por cada cargo y materia de especialización.
- ✓ Los Comités integrarán la lista de las personas aspirantes que hayan concurrido a la convocatoria y reúnan los requisitos constitucionales de elegibilidad a través de la documentación que presenten, sin que puedan exigirse requisitos adicionales a los establecidos en la Constitución.
- ✓ Acreditados los requisitos de las personas aspirantes, los Comités procederán a calificar su idoneidad para desempeñar el cargo. Para ello, podrán tomar en cuenta su perfil curricular, así como sus antecedentes profesionales y académicos, **entre otros que determine cada Comité** para valorar su honestidad y buena fama pública.

Asimismo, del artículo tercero transitorio de la reforma a la Ley Electoral se establecen los siguientes lineamientos, con motivo de la reforma constitucional en materia de elección de personas juzgadoras, se pueden destacar los siguientes puntos:

- Los Comités de Evaluación verificarán que las personas aspirantes que hayan concurrido a la convocatoria reúnan los requisitos constitucionales de elegibilidad a través de la documentación que presenten, en los términos del párrafo cuarto del artículo 500, y publicarán el listado de las personas que hayan cumplido con los requisitos constitucionales de elegibilidad.
- Los Comités de Evaluación calificarán la idoneidad de las personas elegibles en los términos del numeral cinco del artículo 500.

²⁷ Artículo 96, párrafo primero, fracción II; incisos a) y b).

²⁸ Artículo 500.

- Los Comités depurarán dicho listado mediante insaculación pública para ajustarlo al número de postulaciones para cada cargo por cada Poder atendiendo a su especialidad por materia y observando la paridad de género.

Al respecto, el CE dispuso en su convocatoria que verificaría que las personas aspirantes reunieran los requisitos constitucionales de elegibilidad y, en su oportunidad, publicaría el listado de las personas que cumplieran con los mismos, de conformidad con lo previsto en el artículo 500 de la Ley Electoral.

2. Distinción entre requisitos de elegibilidad e idoneidad.

En el marco del proceso de elección de personas juzgadoras, mediante voto popular, es indispensable distinguir con claridad entre requisitos de elegibilidad y requisitos de idoneidad, dado que ambos tienen naturalezas, funciones y mecanismos de verificación distintos, así como autoridades competentes diferenciadas.

Los **requisitos de elegibilidad** son aquellos que la Constitución y las leyes establecen como condiciones objetivas, medibles y previamente determinadas para que una persona pueda contender por un cargo público.

Entre estos requisitos se encuentran la nacionalidad, la edad, la residencia, el no haber sido condenado por delito doloso, entre otros. Estos requisitos **son verificables ex ante y su cumplimiento puede ser constatado por la autoridad electoral al momento de registrar candidaturas o calificar los resultados de una elección**. En el caso de jueces y magistrados estos requisitos están previstos, por ejemplo, en los artículos 97 y 116 de la Constitución.

Por otra parte, los **requisitos de idoneidad** son de carácter cualitativo, técnico y valorativo. No se refieren simplemente a condiciones objetivas, sino a la evaluación de competencias, capacidades, méritos, trayectoria, formación y ética profesional de las personas aspirantes.

Su cumplimiento no es susceptible de verificarse a través de criterios mecánicos o registrales, sino que requiere procesos especializados de evaluación técnica y valorativa, como entrevistas análisis curricular exámenes o deliberación colegiada.

En el caso del sistema mexicano, el artículo 96 de la Constitución establece que corresponde a los comités de evaluación de los tres Poderes en la Unión, proponer las ternas de personas juzgadoras, asegurando que quienes las integran cuenten con la idoneidad requerida para desempeñar el cargo.

En particular en la fracción II, inciso b), del artículo constitucional en cita se dispuso lo siguiente:

“... b) Cada Poder integrará un Comité de Evaluación conformado por cinco personas reconocidas en la actividad jurídica, que recibirá los expedientes de las personas aspirantes, evaluará el cumplimiento de los requisitos constitucionales y legales e identificará a las personas mejor evaluadas que cuenten con los conocimientos técnicos necesarios para el desempeño del cargo y se hayan distinguido por su honestidad, buena fama pública, competencia y antecedentes académicos y profesionales en el ejercicio de la actividad jurídica, y...”

Como se advierte de manera nítida, la revisión de los aspectos técnicos para acreditar la idoneidad de las personas que serían postuladas para los diversos cargos el Poder Judicial de la Federación, corresponde de manera exclusiva a los comités de evaluación, por disposición expresa del Órgano Reformador de la Constitución.

Estos comités, por tanto, son los órganos facultados para verificar la idoneidad en los términos constitucionales no así el INE.

En efecto, **el INE**, en su calidad de autoridad encargada de organizar y calificar la elección, **sólo puede revisar los requisitos de elegibilidad**, pues son condiciones de legalidad objetiva y verificable que inciden en la validez formal de la candidatura.

Por tanto, **no le corresponde evaluar la idoneidad de quienes hayan sido postulados**, ya que dicha valoración fue realizada por el comité evaluador conforme a un procedimiento constitucionalmente previsto.

Cualquier intento por parte del INE de calificar o invalidar una candidatura con base en juicios subjetivos sobre la idoneidad, implicaría invadir atribuciones exclusivas del comité constitucionalmente facultado para ello y, por tanto, violar los principios de legalidad división de poderes y certeza electoral.

En conclusión, la función del INE se limita a verificar el cumplimiento de los requisitos de elegibilidad, sin poder interferir ni reinterpretar las determinaciones sobre idoneidad adoptadas por los comités evaluadores de los tres Poderes de la Unión

3. Línea jurisprudencial de la Sala Superior respecto a la revisión de aspecto técnicos en procesos de selección

Este órgano jurisdiccional ha considerado,²⁹ en procesos para la elección de consejerías del INE, que las respuestas de los reactivos que conforman el examen de conocimientos no pueden ser tuteladas a través de los medios de impugnación en materia electoral previstos para la tutela de los derechos políticos de la ciudadanía.

También ha reiterado que tratándose de aspectos técnicos relacionados con la metodología y evaluación de resultados de una determinada etapa del procedimiento de designación de personas funcionarias electorales, como las presidencias y consejerías electorales de los organismos públicos locales electorales, su revisión no puede realizarse en sede jurisdiccional, ya que este órgano carece de facultades para ello.³⁰

En el caso particular del proceso de la elección de personas juzgadoras, esta Sala Superior en diversos precedentes ha señalado que los Comités de Evaluación cuentan con facultades discrecionales y que las

²⁹ SUP-JE-1098/2023.

³⁰ Similares consideraciones han sido sustentadas en los juicios SUP-JDC-739/2021, SUP-JDC-9921/2020, SUP-JDC-176/2020, SUP-JDC-9/2020, SUP-JDC-524/2018, SUP-JDC-477/2017, SUP-JDC-482/2017, SUP-JDC-490/2017, SUP-JDC-493/2017 y SUP-JDC-500/2017.

autoridades electorales no pueden tener injerencia en aspectos técnicos.³¹

En concreto, al resolver el SUP-JDC-18/2025 y acumulados este órgano jurisdiccional sostuvo que el promedio de nueve debe obtenerse como media aritmética de todas las materias relacionadas con la especialidad y admite su acreditación con estudios de posgrado afines.

En ese precedente la Sala Superior recordó que el texto del artículo 97 constitucional “establece únicamente dos promedios que deben verificarse” (ocho y nueve puntos) y que cualquier fase adicional — aunque persiga un fin deseable— eleva artificialmente el estándar de elegibilidad y es inconstitucional.

Caso concreto

En el caso **Carlos Francisco López Reyna** señala que el CG del INE invadió la esfera competencial de los Comités de Evaluación de los Poderes de la Unión, porque desarrolló una metodología para evaluar el cumplimiento de requisitos que ya habían sido previamente dictaminados; además de que era a dichos Comités a los que les correspondía únicamente la revisión de los requisitos de elegibilidad de las candidaturas.

Son **sustancialmente fundados** los agravios, porque la valoración de las materias correspondientes a la especialidad es una **cuestión técnica** que corresponde a los Comités de Evaluación, quienes en su oportunidad valoraron el cumplimiento de este requisito, de conformidad con la metodología que establecieron en la convocatoria respectiva, sin que se justifique que en este momento el CG del INE lleve a cabo una nueva revisión de estos.

³¹ Así se resolvió en relación con el Comité de Evaluación del Poder Ejecutivo en el SUP-JDC-1158/2024 y acumulados, o bien, en el SUP-JDC-41/2025 y acumulados.

En efecto, la Sala Superior ha sostenido que el CG del INE puede verificar el cumplimiento de los requisitos de elegibilidad de las candidaturas en el momento de la asignación de cargos, sobre la base de los requisitos que la Constitución prevé³².

Sin embargo, la referida facultad **no es absoluta**, pues la autoridad administrativa carece de atribuciones para revisar requisitos cuya valoración fue delegada, por el Órgano Reformador de la Constitución, a un órgano técnico.

En el caso, **los Comités de Evaluación ya habían valorado qué candidaturas cumplían con el requisito de contar con una calificación de nueve puntos o su equivalente** en relación con la especialidad del cargo al que se postularon, sobre la base de las asignaturas que los propios comités consideraron afines a los cargos y a la especialización de cada una de las personas aspirantes.

Por tanto, al verificar nuevamente tal requisito con base en una metodología propia y creada con posterioridad a la jornada electoral, la autoridad responsable afectó los principios de: **a) legalidad de reserva de ley** que impide a la autoridad electoral adicionar requisitos para el goce y disfrute en materia de derechos fundamentales; y **b) el principio de certeza y definitividad** que exige que las reglas de participación estén fijadas antes de que la ciudadanía acuda a las urnas.

Bajo esta perspectiva, resulta necesario diferenciar las características respecto de cada promedio exigido por la Constitución:

- **Promedio general de ocho puntos.** La Constitución mandata que se obtenga tomando todas las calificaciones de la licenciatura en Derecho. Su verificación es puramente documental: basta constatar que el certificado de estudios o kárdez consigna un promedio global mínimo de ocho. Si el documento está ausente o la cifra es inferior, el defecto es **objetivo, inmediato y evidente**.
- **Promedio de nueve puntos en materias afines.** El mismo precepto constitucional fija el umbral, pero deja abierta la manera de integrarlo: indica que puede provenir de la licenciatura o de un posgrado y que debe referirse a las “materias relacionadas con el cargo”.

³² SUP-JE-171/2025 y acumulados.

De manera que el Órgano Reformador de la Constitución exige **una delimitación técnica previa**: identificar qué asignaturas son efectivamente afines, decidir si se toman de la licenciatura, de un posgrado o de ambos y, entonces, promediar. Esa tarea de selección y correspondencia temática es la que fue delegada a los comités de evaluación, para calificar la elegibilidad con base en la documentación entregada por cada aspirante.

Una vez que el Comité declara cumplido el requisito y el listado se remite al Senado, el estándar constitucional queda agotado. Al tratarse de un juicio técnico-académico —no de una constatación mecánica—, cualquier nueva “revaloración” posterior implicaría, inevitablemente, **crear parámetros propios** (número de materias, pesos, inclusión o exclusión de grados) y, con ello, **imponer mayores requisitos que el criterio constitucional**.

En el caso, respecto del **promedio de ocho**, el INE se limitó a cotejar el certificado global y no aplicó regla adicional, pues como se indicó, se trata de un elemento objetivo, inmediato y evidente: basta constatar que el certificado global alcance la cifra mínima. Por ello, el INE puede descartar candidaturas cuando el defecto sea objetivo y evidente.

En contraste, valorar el **promedio de nueve** o su equivalente en la especialidad, exige determinar qué asignaturas son afines y qué grado académico respaldará la media; de ahí que el CG del INE haya creado filtros (número mínimo de materias, veto a mezclar grados) inexistentes en la Constitución o la Ley Electoral, valoración técnica que, en todo caso, es atribución de los Comités de Evaluación.

Esto se evidencia de la revisión del acuerdo que determinó la inelegibilidad de **Carlos Francisco López Reyna**, en el cual la responsable indicó que “*no existía una metodología previa*”, razón por la cual consideró necesario **diseñar reglas nuevas** (mínimo de dos asignaturas en tribunales mixtos, de tres a cinco en unitarios, prohibición de mezclar licenciatura y posgrado salvo usar un grado completo).

Lo anterior, en un ejercicio de una facultad que no le confirió el Órgano Reformador de la Constitución, pues este señaló expresamente en el artículo 96 que la valoración de los elementos técnicos les corresponde a los Comités de Evaluación.

Así, al aplicar esos criterios *ex post*, el CG del INE reabrió un requisito ya acreditado, reemplazó la valoración experta de los comités y excluyó, sin fundamento, a candidaturas que habían resultado electas en las urnas.

En efecto, es criterio de esta Sala Superior que la valoración de las materias que forman parte de los promedios requeridos y la revisión de los historiales académicos son una cuestión técnica, cuya valoración corresponde de forma **exclusiva a los Comités de Evaluación**³³.

En ese sentido, el **CG del INE no contaba con atribuciones para valorar nuevamente el expediente académico de Carlos Francisco López Reyna**, a finde valorar si cumplía o no con el promedio de nueve en las materias relacionadas con su especialidad.

Al asumir una función que no le correspondía, el CG del INE **se sustituyó indebidamente** en el juicio técnico de los Comités de Evaluación, sin contar con una metodología propia y validada para realizar una valoración especializada.

Esto no desconoce la facultad del INE para revisar si las candidaturas cumplen con los requisitos constitucionales de elegibilidad; sin embargo, se insiste, debemos distinguir entre aquellos requisitos objetivos que no requieren una valoración técnica (como podría ser la nacionalidad, residencia, edad) frente a los requisitos que, dadas sus particularidades, requieren una valoración especializada.

De manera que las atribuciones del INE no comprenden la revisión de elementos que **ya fueron valorados** por un órgano especializado

³³ SUP-JDC-18/2025 y acumulados.

mediante una metodología previamente establecida con base en criterios definidos en la propia convocatoria.

Permitir que una autoridad administrativa sustituya unilateralmente la determinación de un órgano técnico, rompe con la lógica del proceso de selección de candidaturas del Poder Judicial, pues este se compuso de un proceso complejo en el que intervinieron diversos órganos y, en concreto, los Comités de Evaluación en ejercicio de una **facultad constitucionalmente reconocida**, valoraron los perfiles técnicos de las candidaturas en ejercicio de una facultad discrecional.

Por tanto, al haberse pronunciado sobre una cuestión reservada a los Comités de Evaluación, el CG del INE incurrió en una extralimitación de facultades que resulta contraria al marco normativo aplicable, lo cual hace **fundado** el agravio planteado por **Carlos Francisco López Reyna**.

Para ilustrar cómo la metodología de selección de asignaturas determina el promedio final y, por ende, le elegibilidad de una candidatura, a continuación, se presenta un ejercicio comparativo, en el caso que nos ocupa.

El CG del INE calculó el promedio de la especialidad de **Carlos Francisco López Reyna** a partir de las siguientes materias: Derecho del Trabajo I (8), Derecho del Trabajo II (9.5) y Derecho Procesal del Trabajo (8), de las cuales obtuvo el promedio de 8.50, es decir, por debajo del umbral constitucional de nueve puntos.

La selección de determinadas materias y la exclusión de otras inciden de forma determinante en el promedio obtenido: variar una sola asignatura puede traducirse en cumplir o no el requisito constitucional. Por ello, la falta de justificación técnica en la elección de las materias vuelve arbitrario el cálculo realizado por la autoridad.

En consecuencia, la exclusión infundada de asignaturas pertinentes revela un vicio en la metodología seguida por el CG del INE, pues altera

sustancialmente el resultado y se aparta de los criterios aplicados previamente por el CE.

Así, la conclusión de inelegibilidad carece de sustento pues se basa en una operación aritmética construida sobre una selección de materias carente de motivación técnica y ajena a la metodología especializada que el propio Órgano Reformador de la Constitución reservó a los Comités de Evaluación.

En consecuencia, al haber sido alcanzada la pretensión de **Carlos Francisco López Reyna**, es innecesario el análisis de sus restantes motivos de inconformidad.

Ahora bien, por lo que hace a la pretensión de **Fernando Delgadillo González**, y **Karina Isela Díaz Guzmán**, de ocupar la vacante de Carlos Francisco López Reyna, esta Sala Superior estima que, en el caso, operó automáticamente un **cambio de situación jurídica** evidente que **deja sin materia los medios de impugnación** intentados, al haberse perdido el propósito principal del sistema judicial de resolver su litigio.

Por otra parte, por lo que hace a Omar Vázquez Pérez y Yuridia Arias Álvarez, se considera que, con independencia de lo resuelto, **son inoperantes sus planteamientos**, porque carecen de interés jurídico para pretender ocupar la vacante de Carlos Francisco López Reyna, debido a que participaron, de manera respectiva, como candidato y candidata a una magistratura en los distritos judiciales tres y cuatro, en el Tercer Circuito, Jalisco, es decir, en un distrito judicial distinto al que compitió Carlos Francisco López Reyna.

Asimismo, se considera innecesario analizar los restantes motivos de agravio que hacen valer las referidas candidaturas, debido a que los hacen depender de su pretensión de que se les asigne la vacante en comento.

V. EFECTOS

a) Se **revoca** el acuerdo **INE/CG571/2025**, mediante el cual el CG del INE determinó que Carlos Francisco López Reyna resultó inelegible por no contar con una calificación de nueve puntos o su equivalente en la licenciatura, especialidad, maestría o doctorado, respecto a las materias relacionadas con el cargo al que se postuló.

b. Se **revoca** en lo que fue materia de impugnación el acuerdo **INE/CG572/2025**, por el cual el CG del INE declaró la validez de la elección y entregó las constancias de mayoría a las personas que resultaron ganadoras.

c. Se **vincula** al CG del INE a entregar a Carlos Francisco López Reyna la constancia de mayoría correspondiente.

Por lo expuesto y fundado se

VI. RESUELVE

PRIMERO. Se **acumulan** las demandas debiéndose agregar una copia de los puntos resolutivos de esta resolución a los juicios acumulados.

SEGUNDO. Se **revoca** en lo que fue materia de impugnación, los actos impugnados para los efectos precisados en la presente ejecutoria.

TERCERO. Se **vincula** al CG del INE para los efectos precisados en esta ejecutoria.

NOTIFÍQUESE como en Derecho corresponda.

En su oportunidad, archívense los expedientes como asuntos concluidos y, en su caso, hágase la devolución de la documentación pertinente.

Así, por ***** de votos, lo resolvieron las magistradas y los magistrados que integran la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. El secretario general de acuerdos autoriza y da fe, así como de que la presente ejecutoria se firma de manera electrónica.

Este documento es una representación gráfica autorizada mediante firmas electrónicas certificadas, el cual tiene plena validez jurídica de conformidad con los numerales segundo y cuarto del Acuerdo General de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación 3/2020, por el que se implementa la firma electrónica certificada del Poder Judicial de la Federación en los acuerdos, resoluciones y sentencias que se dicten con motivo del trámite, turno, sustanciación y resolución de los medios de impugnación en materia electoral.

NOTA PARA EL LECTOR

El presente proyecto de sentencia se publica a solicitud del magistrado ponente, en términos del Acuerdo General 9/2020 de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, por el que se establecen los lineamientos para la publicación de los proyectos de resolución por parte de los integrantes del Pleno de las Salas de este Tribunal Electoral.

PROYECTO DE RESOLUCIÓN

ANEXO

METODOLOGÍA IMPLEMENTADA POR EL CG DEL INE PARA OBTENER EL PROMEDIO MÍNIMO DE 9 PUNTOS EN LAS MATERIAS AFINES A LA ESPECIALIDAD.

En relación con los nueve puntos requeridos para la especialidad jurídica, la metodología utilizada por el CG del INE fue la siguiente:

- Tomó en cuenta como mínimo las dos materias mejor calificadas del historial académico de las personas candidatas de cada especialidad que atienda el Tribunal Mixto por el que se contiene.
- Para el caso de las especialidades unitarias promedió como mínimo de tres a cinco de las asignaturas mejor calificadas del historial académico de las personas candidatas afines a la especialidad por las que contendieron. A excepción de los casos en los que no exista un mínimo de tres.
- El promedio de nueve puntos se obtiene sumando los valores y dividiendo la suma por el número de valores, lo cual podía ser subdividido en: **a)** revisión de materias sustantivas y adjetivas de la licenciatura; **b)** promedio general obtenido en los estudios de posgrado relacionados con su especialidad; **c)** promedio general obtenido en las materia de licenciatura y posgrados que siguen la línea de especialidad para la que aspiró, sin combinarse grados académicos; y **d)** promedio de calificaciones de la licenciatura, especialidad, maestría o doctorado, siempre que conformen una misma línea de especialización curricular, sin combinar materias de grados académicos.
- Tomando en cuenta el diseño académico de la licenciatura en Derecho y el nombre que la institución escolar le dé a las asignaturas, se consideraron aquellas que vayan en la misma línea de especialización.
- También se tomó en cuenta el promedio general en un posgrado siempre que se refiera de manera específica a la especialidad que se compitió.
- De la revisión de los expedientes, la responsable advirtió **veinticuatro casos en los que las personas ganadoras pero que no cumplieron con el promedio mínimo** requerido por la Constitución, de ocho y nueve puntos.
- En consecuencia, la responsable determinó que al no cumplirse con los promedios de dichas candidaturas, declaró vacantes los cargos.